

MA. ALEJANDRA LAGOMARSINO
SECRETARIA

**“SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PETRÓLEO SA s/ RECURSO DE QUEJA
POR REC. DIRECTO DENEGADO”**

Buenos Aires, ¹² de junio de 2012.

Y VISTO:

El recurso de queja interpuesto por Shell Compañía Argentina de Petróleo SA a fs. 102/107, contra la resolución dictada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia n° 19/12 del 3.4.12; y

CONSIDERANDO:

1.- Shell Compañía Argentina de Petróleo SA planteó recurso de queja respecto del efecto devolutivo con el que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concedió su recurso directo de apelación (interpuesto el 31.1.2012 contra la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia n° 6/12 del 26.1.12).

Explicó que la resolución CNDC n° 19/12 concedió su recurso directo de apelación con efecto “devolutivo”, pero que debió concederse con efecto “suspensivo” dado que la resolución apelada (la n° 6/12) es ilegítima porque le impide ejercer libremente su actividad comercial, estableciendo precios máximos para la venta de gas oil a las empresas de transporte público de pasajeros. Así, solicitó que se modifique la concesión del recurso de apelación para que el mismo tenga efecto suspensivo respecto de la resolución CNDC n° 6/12.

2.- En primer término, corresponde recordar que las peticiones y planteos de las partes deben ser proveídas –admitidas o denegadas– según los términos del Código de rito pertinente y en función del criterio del magistrado, en el marco de las facultades instructorias que le asisten como director del proceso (esta Sala, causa 1479/97 del 21.10.2010). Dichas facultades tienden no sólo a evitar los efectos de la paralización del proceso, sino también a optimizar los trámites procesales, evitando actuaciones innecesarias o dilatorias, y respetando el principio de economía procesal (cfr. esta Sala, causa 8449/99 del 22.4.10).

USO OFIC AL

Incluso en algunos casos los Jueces se encuentran autorizados a fijar la clase de juicio bajo la que tramitará la pretensión (cfr. art. 319 del Código Procesal Civil y Comercial, de aplicación analógica al presente caso).

En ese contexto, debe ponderarse que la peticionante finca su pretensión en la alegada ilegitimidad de la resolución administrativa n° 6/12 del 26.1.2012 dictada por la Secretaría de Comercio Interior y en que, de manera actual, dicha norma le impide ejercer libremente su actividad comercial. En consecuencia, debe analizarse si en el caso se encuentran reunidos los requisitos indispensables para adoptar una medida judicial cautelar de las características solicitadas.

3.- En ese contexto, el interesado debe acreditar *prima facie* la existencia de verosimilitud en el derecho alegado a su favor y el peligro que entraña la demora –presupuestos que se complementan con el otorgamiento de una contracautela, de resultar pertinente–, puesto que debe demostrar, si bien en un limitado marco propio de la pretensión cautelar, que existen razones que justifican el dictado de resoluciones de esa naturaleza (doctrina de Fallos 323: 337 y 1849, entre otras).

Reiteradamente se ha expresado que la fundabilidad de la pretensión cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino del análisis de la mera probabilidad acerca de la existencia del derecho invocado (cfr. esta Sala, causa 6655 del 7.5.99, entre otras). Ello permite que el Tribunal se expida sin necesidad de efectuar un estudio concluyente y categórico de las distintas circunstancias de la relación jurídica involucrada (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 314:711), de acuerdo con el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisional que son propios de las medidas cautelares (cfr. esta Sala, causas 9643/01 y 726/02 del 14 y 21 de marzo de 2002, respectivamente, entre muchas otras).

En el *sub-lite*, corresponde ponderar que la actora reclama tutela jurisdiccional frente a una resolución administrativa, la cual resulta por ley un acto presuntivamente legítimo (art. 12, ley 19.549), de cuyo carácter se desprende su fuerza ejecutoria (conf. esta Sala, doct. causas 6655/98 del 7/5/1999 y 3696/99 del 16/11/1999 y sus citas). No obstante, esta presunción

debe ceder cuando se los impugna sobre bases *prima facie* verosímiles (doctrina de Fallos 250: 154; 251: 336; 307: 1702; 314: 695; 318: 532; 324: 3213, y otros).

4.- Con el alcance preliminar que corresponde a este tipo de medidas, el Tribunal debe ponderar las trascendentales conclusiones e imputaciones contenidas en la resolución N° 6/2012 –que colocan a las empresas afectadas en riesgo de sanciones, cfr. fs. 43/47–, y el presumiblemente breve lapso que deberá transcurrir hasta que se resuelva el recurso directo de apelación interpuesto (ya radicado ante la Sala bajo el número de expediente n° 1888/2012), aspectos que determinan que resulte apropiado modificar el efecto con el que fue concedido el recurso directo de apelación.

5.- En cuanto al requisito referido al peligro en la demora, este recaudo de admisibilidad se refiere a la necesidad de disipar un temor de daño inminente –acreditado *prima facie*– o presunto (cfr. Fassi-Yáñez, “Código Procesal Comentado”, t. I, p. 48 y sus citas de la nota n° 13: Podetti, “Tratado de las medidas cautelares”, p. 77, n° 19; esta Sala, causa 889/99 del 15.4.99, entre otras; y CNCiv., sala D, del 26.2.85, LA LEY, 1985-C, 398) y, en las circunstancias de estas actuaciones, entiende la Sala que las consecuencias económicas de la resolución impugnada y el riesgo de sanciones que ella comporta, son elementos susceptibles de generar un perjuicio concreto y actual a la parte actora, en forma anticipada a las conclusiones que pudieran obtenerse de la investigación que se halla en curso ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

6.- Por lo expuesto, resultan *prima facie* verosímiles los argumentos de la demandante, por los cuales se ha impugnado la resolución administrativa N° 19/2012 del 3.4.2012 (cfr. fs. 7/13). En consecuencia, es procedente decretar la medida judicial solicitada modificando el efecto con el cual fue concedido el recurso directo de apelación en la resolución administrativa n° 19/2012.

Adviértase que lo aquí decidido no constituye la revocación del acto administrativo impugnado, sino solamente la modificación del efecto con el que fue concedido el recurso directo de apelación, suspendiendo su ejecución y cumplimiento hasta que se resuelva el recurso directo. De esta

manera, no se configura en el caso anticipación de juzgamiento en la controversia jurídica ventilada en autos.

7.- Conviene recordar, finalmente, que la medida aquí dictada está caracterizada por una precariedad tal que permite a los Jueces disponer su modificación o inclusive su inmediata revocación si se adjuntaran nuevos elementos de prueba o constancias de hecho o derecho que así lo justifiquen (cfr. arts. 203 y 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo que resulten pertinentes al caso regido preponderantemente por la ley 25.156).

8.- En lo concerniente al requisito de la contracautela, en atención a las particularidades de las cuestiones debatidas —efecto con el que concede un recurso directo de apelación—, y la solvencia económica de la recurrente para la eventualidad de que se provoque un daño a la demandada, el Tribunal considera que la caución juratoria resulta suficiente, en esta ocasión, para garantizar la medida judicial que aquí se decreta.

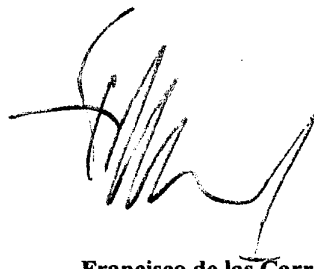
En función de todo lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE**: admitir el planteo formulado por Shell Compañía Argentina de Petróleo SA y conceder el recurso directo de apelación interpuesto contra la resolución de la Secretaría de Comercio Interior n° 6/2012 con efecto suspensivo.

La Dra. María Susana Najurieta no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia compensatoria de feria (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese —a la Secretaría de Comercio Interior mediante oficio de estilo con copia de la presente—, y sigan los autos según su estado.



Martín Diego Farrell



Francisco de las Carreras



SALA CIVIL Y COMERCIAL N°1

COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA
MESA DE ENTRADAS

N° 636 To 293.

